

Organismo:	Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Mar del Plata
Carátula:	FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A. S/ APREMIO PROVINCIAL -
Nro de causa:	9463
Fecha:	10/09/2020 13:02:48
Descripción:	SENTENCIA
Estado:	Consintiendo

En la ciudad de Mar del Plata, **a los 10 días del mes de setiembre del año dos mil veinte**, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en **Acuerdo Ordinario**, para pronunciar sentencia en la causa **P-9463-MP2 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A. s. APREMIO PROVINCIAL”**, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores **Mora, Riccitelli y Ucín**, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 13-09-2019, dictó sentencia, rechazó las excepciones de pendencia de recurso y de prescripción opuestas por la accionada, la condenó a abonar al Fisco la totalidad de las deudas volcadas en los títulos ejecutados –con más intereses legales-, difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad y le impuso las costas.

II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto con fecha 19-09-2019 por la accionada y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde votar la siguiente:

CUESTION

¿Es fundado el recurso?

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:

I.1.1. Al fundar aquella parcela del fallo en crisis que rechazó la defensa de prescripción articulada por la demandada, el *a quo* aclaró que dicha excepción debía resolverse de acuerdo a los lineamientos del Código Civil en su anterior redacción, en tanto resultar la legislación vigente al momento en que se originaron las obligaciones cuyo pago perseguía el Fisco.

Aclaró que a la luz de la doctrina sentada por el Superior Tribunal de la Nación en la denominada causa “Filcrosa”, correspondía declarar inconstitucionales los arts. 159 y 161 inc. “a” del ordenamiento fiscal bonaerense – t.o. 2011-, ya que la aplicación al caso de dichos preceptos traía aparejada una indebida ampliación del plazo prescriptivo reglado en la citada normativa de fondo.

Computó el plazo de prescripción quinquenal aplicable al caso desde que cada uno de los períodos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos reclamados se tornó individualmente exigible y concluyó que tales anticipos se encontraban prescriptos al momento de interponerse la presente acción ejecutiva.

Indicó que si bien la notificación a la contribuyente de la Disposición SEATYS N° 560/17 traería aparejada la suspensión del plazo de prescripción, tal comunicación tuvo lugar luego de fenecido el término con que contaba el Fisco para iniciar las presentes actuaciones judiciales, razón por la cual aquella no incidía en el cómputo practicado.

No obstante lo expuesto, sostuvo que correspondía dispensar al Fisco de los efectos de la prescripción cumplida en los términos del art. 3980 del Código Civil –t.a.-.

Por dicha senda, sostuvo que la determinación de los anticipos exigidos se produjo como resultado de un procedimiento administrativo conformado por diversos trámites y actos administrativos preparatorios que no podían ser obviados por la Administración.

Meritando las constancias obrantes en el expediente administrativo acollorado al presente, afirmó que el ente recaudador tuvo la posibilidad de liquidar la deuda ejecutada a partir del 22-01-2019, esto fue desde la emisión de la Providencia N° 43/19 -acto administrativo que dispuso que no era factible otorgar al recurso de reconsideración extemporáneamente interpuesto por la contribuyente contra el acto determinativo del impuesto exigido, el carácter de denuncia de ilegitimidad-.

Por todo lo cual postuló que, al haber sido interpuesta la presente acción con fecha 07-02-2019, cabía dispensar al Fisco de los efectos de la prescripción cumplida, pues el apremio fue iniciado dentro de los tres (3) meses siguientes a que el crédito reclamado resultara susceptible de ser requerido en sede judicial.

2. En su memorial la accionada argumenta que mal pudo el juez de grado dispensar al Fisco de la prescripción operada en torno de los períodos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ejecutados en la especie, cuando aquella acaeció con anterioridad al dictado de la resolución determinativa recaída en las actuaciones administrativas acompañadas al apremio.

Agrega que no corresponde eximir al Fisco de la prescripción, pues éste demoró 5 años en dar inicio al procedimiento que culminó con la determinación del tributo demandado. Afirma que del expediente administrativo adjuntado a la causa surge que el organismo recaudador demoró injustificadamente la tramitación del procedimiento determinativo del impuesto ejecutado.

Estima que no cabe dispensar de la prescripción a la Administración sopesando el lapso durante el cual se extendió la sustanciación del trámite determinativo del impuesto ejecutado, pues que tal criterio vaciaría de contenido al instituto de la prescripción en el ámbito tributario, dado que bastaría al Fisco con iniciar dicho procedimiento a los efectos de beneficiarse con los efectos de la dispensa contemplada en el art. 3980 del Código Civil –t.a.-.

3. En su réplica al reseñado memorial, el Fisco manifiesta su conformidad frente a lo resuelto en la instancia de origen, controvirtiendo los argumentos ensayados en el escrito recursivo y solicitando, en consecuencia, el rechazo del embate interpuesto.

II. El recurso merece prosperar.

1. Ante todo, aclaro que, al no haber la recurrente mencionado en lugar alguno a las multas incorporadas a las cartulares ejecutadas, aquella parcela del fallo en crisis que ordenó mandar llevar adelante el presente apremio por los importes correspondientes a dichas penalidades arriba firme y consentida a esta instancia de revisión y –por ello- deviene irrevisable por este Tribunal. [cfr. doct. esta Alzada causa **P-3150-MP2 “Schmidt”**, sent. de 07-09-2012].

2. Cabe puntualizar –además- que comparto el criterio propiciado por el *a quo* en cuanto concluyó que al momento de iniciarse las presentes actuaciones judiciales los períodos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos exigidos a la demandada se hallaban prescriptos.

2.1. En la denominada causa “Filcrosa S.A.” (Fallos 326:3899) la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que, en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12º de la Constitución Nacional, es potestad del legislador nacional – facultado a dictar los Códigos de fondo- regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y, en consecuencia, sus modos de extinción, resultando así vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos códigos. Dicho criterio fue ratificado por la Corte al dictar sentencia en la causas C.2374.L.XLII “Casa Casmma S.R.L. s. Concurso Preventivo s. Incidente de Verificación Tardía (promovido por la Municipalidad de La Matanza) s. Recurso de Hecho” (Fallos 332:616); M.377.XXXVII “Municipalidad de Resistencia c/Lubricom S.R.L. s/ejecución fiscal” (Fallos 332:2108) y B.879.XXXVI “Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa” (Fallos 332:2250), fallos en los cuales fueron replicados los fundamentos desplegados en el precedente “Filcrosa”, siendo ésta, por lo tanto, la

última opinión jurisdiccional en la materia que merece deferencia (cfr. doct. esta Cámara causas **P-1074-BB1 “Patagonia Motors S.A.”**, sent. del 15-09-2009; **P-1598-MP1 “Capiel”**, sent. del 9-02-2010; **P-1756-BB1 “Calabró”**, sent. de 04-05-2010 y **P-2912-MP2 “Barragan y Cía.”**, sent. de 07-02-2012).

El citado temperamento fue también propiciado por la Suprema Corte bonaerense en la causa C. 81.253 “Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta” (sent. del 30-V-2007), habiendo explicitado más tarde, en la causa C. 99.094 “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Fadra S.R.L., López Osvaldo y Locato Emilio Tomás s. Apremio” (sent. de 14-VII-2010), que los argumentos vertidos en el primero de los mencionados precedentes para sostener que resulta potestad exclusiva del legislador nacional regular el régimen de las obligaciones, alcanzaban a todo lo relativo al instituto de la prescripción. Similar tesitura siguió, por mayoría, en la causa A. 69.340 “Manuel Angel Mato y Cía. S.H. y otros”, sent. de 16-V-2012.

Queda claro entonces que -en consonancia con lo resuelto por esta Alzada en la causa **P-502-BB1 “Microcontrol”** (sent. de 10-09-2009), entre muchas otras- es el Estado Nacional quien ostenta la potestad de regular lo concerniente al vínculo obligacional entre acreedores y deudores (art. 75 inc. 12º de la Const. Nac.), siendo la fijación del plazo de prescripción de las obligaciones, el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción –entre otros aspectos- facetas diversas de aquella misma facultad, por lo que, conforme la regla de jerarquía normativa establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional, los Estados provinciales deben adecuar su regulación a las pautas establecidas en el Código Civil [t.a.] (cfr. doct. esta Cámara en la causa **P-4496-AZ1 “Salvi”**, sent. del 6-03-2014).

Desde tal mirador, estimo que resulta acertado el criterio propugnado por el juzgador en cuanto examinó la defensa de prescripción a la luz de las normas que al respecto contiene el Código Civil [t.a.], en la medida que se demuestre que los preceptos del Código Fiscal bonaerense regulatorios de dicho instituto, resultan

incompatibles con las directrices emanadas de la ley de fondo y, claro está, siempre que su aplicación perjudique a la defensa del apremiado (doct. esta Cámara causa **P-3230-MP2 “Petrolera Mar del Plata S.A.”**, sent. del 07-09-2012).

No obstan a lo precedentemente dicho las alegaciones efectuadas por el letrado apoderado por la Fiscalía de Estado provincial en cuanto plantea –en esencia- que a partir de la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial [Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077], el legislador provincial cuenta expresamente con la facultad de regular todos aquellos aspectos atinentes a la prescripción liberatoria de los tributos locales, circunstancia que –en su visión- autorizaría a dejar de aplicar la doctrina acuñada por el Superior Tribunal de la Nación en la causa “Filcrosa” e impondría juzgar la defensa en estudio a la luz de las directrices que emanan del Código Fiscal bonaerense.

Los motivos aportados para variar el criterio antes expuesto, no merecerán auspicio.

Es que el Fisco provincial, con su argumentar, pretende desbaratar la doctrina sentada por el Superior Tribunal Federal en la denominada causa “Filcrosa”, echando mano a la nueva regulación civil y comercial que, si bien vigente en la actualidad, no está llamada a regir la relación jurídica a que este juicio se refiere, nacida, desarrollada y extinguida al amparo de la legislación civil anterior que, por ello, escapa a la vigencia de la ley actual [cfr. art. 7 de la ley 26.994].

Con todo, cabe desestimar aquellos argumentos con sustento en los cuales el Fisco asevera que correspondería otorgar primacía a las normas que en materia de prescripción contiene el Código Fiscal bonaerense por sobre las reglas que respecto de tal tópico contiene el Código Civil (t.a.).

Por las razones señaladas, corresponde analizar la prescripción planteada de acuerdo con las pautas que brinda el Código Civil –t.a.-, declarando la

inconstitucionalidad de aquellas normas locales que extiendan indebidamente los plazos prescriptivos fijados por dicha legislación de fondo.

Remarco que el Código Civil –t.a.- establece en el art. 3956 que *“la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación”*.

Por su parte, el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) [art. 133 en t.o. 2004], prevé que *“los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de periodo fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingresos del gravamen”* [subrayado agregado].

Este último supuesto parece dirigido a la gabela cuyo pago se requiere en autos –esto es, al Impuesto sobre los Ingresos Brutos-, en la que el período fiscal es el año calendario [conf. art. 209 del Código Fiscal -t.o. 2011-].

Contrapuestas ambas normas –la del Código Civil y la del Código Fiscal- **queda a la vista que el legislador provincial amplió indebidamente –a través de la fijación del punto de inicio del cómputo- el plazo prescriptivo de cada ejercicio fiscal al menos en un año**, si consideramos que las **declaraciones juradas anuales** se realizan en el año calendario siguiente al del ejercicio gravado.

No otra conclusión podría extraerse, si idéntica contraposición se efectúa respecto del precepto fiscal que regula el **pago de anticipos** con la normativa civil. Es que, cada anticipo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es exigible individualmente al mes siguiente de su vencimiento [conf. art. 210 del Código

Fiscal -t.o. 2011-], por lo que el cómputo de la prescripción de cada uno de ellos debe comenzar a regir a partir del momento de su exigibilidad [art. 3956 del Código Civil (t.a.)].

Deviene ineludible concluir, entonces, que el fallo en crisis resulta ajustado a derecho en cuanto declaró inconstitucional el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) [art. 133 en t.o. 2004], por configurar un claro apartamiento de lo reglado por el art. 3956 del Código Civil –t.a.-

2.2. Fijado el *dies a quo* del plazo prescriptivo quinquenal aplicable al caso [cfr. arts. 157 del ordenamiento fiscal bonaerense –t.o. 2011- y 4.027 del Código Civil (t.a.)] en la fecha de vencimiento de cada uno de los períodos ejecutados [cfr. arts. 3956 del Código Civil (t.a.) y 210 del Código Fiscal], corresponde determinar si el más reciente de éstos (12 de 2011) fue –o no- requerido judicialmente en tiempo útil, en tanto tal determinación habrá de proyectarse sobre el resto de los anticipos anteriores.

En tal tarea, observo:

(i) que el período examinado se volvió exigible individualmente el mes de enero de 2012, momento a partir del cual comenzó a correr el plazo de prescripción quinquenal [cfr. arts. 3956 y 4027 inc. 3° del Código Civil; cfr. doct. esta Alzada causa **P-2866-MP2 “Jewerowicz”**, sent. de 14-02-2012];

(ii) que el lapso prescriptivo quinquenal feneció durante el mes de enero de 2017, razón por la cual es posible concluir que el anticipo en cuestión fue reclamado en forma extemporánea, desde que la presente acción ejecutiva fue entablada con fecha 07-02-2019 [cfr. fs. 2/3].

2.3. No obstan al temperamento propugnado los planteos de suspensión de la prescripción formulados por el ejecutante.

2.3.1. Observo que el Fisco plantea que la notificación de la resolución de inicio del trámite determinativo del tributo ejecutado habría suspendido el curso de

la prescripción conforme lo reglado en el último párrafo del art. 161 del Código Fiscal –t.o. 2011-.

A la luz de las premisas delineadas en el apartado “II.2.1.”, se torna del caso declarar inconstitucional el último párrafo del art. 161 del Código Fiscal –t.o. 2011-, en tanto dicho precepto amplía ilegítimamente el plazo de prescripción aplicable al caso al establecer una causal de suspensión de tal lapso que no se encuentra contemplada en el ordenamiento civil de fondo –t.a.-.

Enlazado con lo anterior, pongo de relieve que el anoticiamiento de la decisión administrativa de dar inicio al procedimiento estimativo del impuesto peticionado [Disposición N° 5293, emitida el 29-09-2016] no importó un requerimiento fehaciente de pago de dicha gabela en los términos del art. 3986 -segundo párrafo- del Código Civil [t.a.], pues ésta no se hallaba determinada al momento de efectuarse tal comunicación, toda vez que recién fue establecida con la emisión de la Disposición SEATYS N° 560/17, el 07-06-2017.

2.3.2. Tampoco incide en el cómputo de la prescripción la notificación a la contribuyente de la Disposición SEATYS N° 560/17 –acto administrativo que fijó los anticipos ejecutados-, pues si bien tal comunicación importó una indiscutible intimación de pago de los períodos reclamados (conforme lo reglado en los arts. 3986 -segundo párrafo- del Código Civil [t.a.] y art. 161 inc. “a” –primera parte- del Cód. Fiscal –t.o. 2011-), ésta fue practicada en el mes de junio de 2017 [cfr. fs. 333/357 del expediente administrativo acollarado a la causa], esto fue cuando ya había fenecido el lapso con que contaba el Fisco para perseguir judicialmente la cancelación de la gabela en cuestión [cfr. doct. esta Alzada causas **P-4225-BB1 “Cerella”**, sent. de 31-10-2013].

Por tal motivo, similar falta de incidencia sobre el plazo prescriptivo cabe predicar –por extensión- respecto de la previsión contenida en el segundo párrafo del art. 161 inc. “a” del Código Fiscal –t.o. 2011-, circunstancia que –en la especie- dispensa de examinar la constitucionalidad de dicha norma en cuanto, frente a la interposición de un recurso administrativo, amplía, al menos en noventa (90) días,

la suspensión anual del plazo de prescripción derivada de la intimación de pago de la obligación ejecutada [cfr. doct. esta Alzada causa **P-7619-MP2 “Hidalgo”**, sent. de 02-11-2017].

3. Sentado lo anterior, estimo que corresponde acoger aquella crítica por medio de la cual la recurrente pregona que no corresponde dispensar al Fisco de la prescripción operada en torno de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aquí ejecutados.

Observo que, al replicar la defensa de prescripción opuesta por la accionada, el Fisco adujo que –en virtud de lo reglado por el art. 3980 del Código Civil (t.a.)- correspondería dispensar a su parte de los efectos de la prescripción cumplida en punto del impuesto exigido, sopesando que le habría sido imposible promover el presente apremio hasta el 20-12-2018, fecha en que la contribuyente se notificó de la Disposición Delegada SEAJ N° 439/18, acto que declaró extemporáneo el recurso de reconsideración articulado contra la Disposición SEATYS N° 560/17, determinativa del tributo ejecutado.

Sopesando lo expuesto en el apartado “**II.2.2.**”, considero que mal puede eximirse al ente recaudador de la prescripción cumplida respecto de los anticipos ejecutados meritando para ello la interposición del remedio de reconsideración intentado por la contribuyente contra el acto administrativo que estableció la referenciada gabela, cuando dicho recurso fue promovido con fecha 20-07-2017 [cfr. fs. 359 del expediente administrativo acollarado al apremio], esto fue cuando ya se había extinguido el término con que el Fisco contaba para articular útilmente el presente apremio.

4. Por los fundamentos *supra* esbozados, corresponde acoger la crítica en tratamiento, revocar el fallo en crisis en cuanto dispensó al ejecutante de los efectos de la prescripción cumplida en torno a los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos exigidos en autos, acoger la excepción de prescripción en relación a éstos y –consecuentemente- a los recargos aplicados sobre tales períodos por la

autoridad fiscal [cfr. doct. esta Alzada causa **P-7619-MP2 “Hidalgo”**, sent. de 02-11-2017] y rechazar el presente apremio en tal parcela.

III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso intentado, revocar el fallo en crisis en cuanto rechazó la excepción de prescripción en torno a los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos exigidos en autos, acoger dicha defensa en relación a éstos y –consecuentemente- a los recargos aplicados sobre los mentados períodos por la autoridad fiscal y rechazar el presente apremio en tal parcela. Las costas de primera instancia, en la porción por la que prospera la excepción de prescripción, deberían imponerse al Fisco –cargando el apremiado con los restantes gastos causídicos de grado-, mientras que las costas de alzada deberían ser íntegramente soportadas por el ejecutante [arts. 68, 71, 556 y 274 del C.P.C.C.; 25 de la ley 13.406].

Voto a la cuestión planteada por la **afirmativa**.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:

Adhiero al voto que abre el Acuerdo.

Me permito agregar breves consideraciones adicionales.

[i] en punto a lo señalado en la opinión antecedente en cuanto a no considerar al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077) como un ordenamiento que importe dejar de lado la aplicación de la doctrina acuñada por el Superior Tribunal de la Nación en la causa “Filcrosa”, remarco que tal razonamiento, de algún modo, encontraría respaldo en recientes pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (cfr. causas A. 71.388 “Recuperación de Créditos S.RL”, sent. del 16-5-2018 y A. 72.397 “Cefas S.A.”, sent. del 5-XII-2018); en los cuales, en oportunidad de analizar controversias con similares alcances a los verificados en la especie, y cuyos hechos configurativos también habían acaecido en un momento anterior a la

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (Ley 26.994), la mayoría de los miembros del Tribunal juzgó las cuestiones suscitadas en esos términos con arreglo a la jurisprudencia elaborada al respecto por esa Corte y su similar Nacional a partir de la tantas veces citada causa “Filcrosa”, esto es, con prescindencia de la aplicación directa de las previsiones del nuevo régimen legal civil y comercial.

Y ese es, pues, el contexto jurídico en el que corresponde subsumir y ponderar el caso **sub examine**, ello, por cierto, sin perjuicio de las consideraciones que, eventualmente puedan formularse respecto de aquellas hipótesis de juzgamiento que se susciten bajo el imperio de la mentada Ley 26.994.

En razón de lo expuesto, cabe propiciar la confirmación del pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. a) del Código Fiscal (t.o. 2011) en materia de prescripción tributaria y la consecuente aplicación de las normas del Código Civil (t.a).

[ii] en torno a lo plasmado en el apartado **II.3.** del voto que antecede, siendo que deben computarse los cinco [5] años del término prescriptivo desde el 20-01-2012, la interposición de la presente ejecución debió tener lugar no más allá del 20-01-2017, ya que el único evento con posibilidad de suspender el curso de la defensa articulada lo era el acto determinativo del tributo reclamado (Disposición N° 560 del 07-06-2017), que fue recién notificada a la apremiada con fecha 19-06-2017, esto es, con posterioridad al fenecimiento del período de pervivencia de la acción. Siendo ello así, ningún otra circunstancia de fecha posterior a lo verificado *supra*, podría tener la virtualidad para prolongar un período de vitalidad de la acción ya extinguido (cfr. mi voto causa **P-8654-BB1 “DM INTERMEDIACION Y LOGISTICA S.A.”**, sent. de 28-05-2019).

Con las precisiones apuntadas, que junto con lo sostenido por el colega ponente dan adecuada satisfacción al principio de apelación adhesiva [teniendo en

cuenta la réplica fiscal -escrito electrónico del 16-04-2019- a las defensas formuladas por la apremiada], voto por la **afirmativa**.

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Ucin dijo:

Adhiero al voto del señor Juez doctor Mora con las observaciones formuladas por el señor Juez doctor Riccitelli.

Voto, entonces, por la **afirmativa**.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Hacer lugar al recurso intentado, revocar el fallo en crisis en cuanto rechazó la defensa de prescripción en torno a los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos exigidos en autos, acoger dicha excepción en relación a éstos y –consecuentemente- en punto a los recargos aplicados por la autoridad fiscal sobre los mencionados períodos y rechazar el presente apremio en tal parcela. Las costas de primera instancia, en la porción por la que prospera la excepción de prescripción, se imponen al Fisco –cargando el apremiado con los restantes gastos causídicos de grado- y condenar al ejecutante a soportar íntegramente las costas de alzada [arts. 68, 71, 556 y 274 del C.P.C.C.; 25 de la ley 13.406].

2. Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad [cfr. arts. 31 de la ley 14.967].

Regístrese, notifíquese y devuélvanse por Secretaría las actuaciones al Juzgado de origen.